

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

RESOLUCIÓN NÚMERO RDGN 00037 DEL 28 DE ABRIL DE 2025



*"Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el
Rupta por solicitud de parte"*

LA DIRECTORA JURÍDICA DE RESTITUCIÓN

En ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 19 y 33 A de la Ley 387 de 1997, el parágrafo 1º del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, el Decreto 640 de 2020, la Resolución 283 de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, estableció que el Incora debía llevar el registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia, informando a las autoridades competentes para que impidan cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante en contra de la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

Que el Decreto 1292 de 2003, suprimió el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora y mediante el Decreto 1300 de 2003 se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y a su vez el numeral 20 del artículo 4º del Decreto 3759 de 2009, determinó que el Incoder, asumiría entre otras funciones la de administrar el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta).

Que el parágrafo primero del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015, ordenó la transferencia del sistema del Rupta por parte del Incoder en liquidación, a la Unidad de Restitución de Tierras para su administración.

Que mediante la Resolución 722 de 2016, el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras delegó en los directores territoriales la facultad para ejercer en cada una de sus zonas las funciones relacionadas con la administración del Rupta.

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: *"Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"*

Que mediante la Resolución 283 del 22 de abril de 2025, *"por la cual se reglamenta la implementación del artículo 3º del Decreto Legislativo 108 de 2025 en lo correspondiente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,"* el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, delegó en la Directora Jurídica de Restitución las facultades para el conocimiento de aquellas solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA, que se presenten o se creen de oficio en el marco de la conmoción interior dictado por el Gobierno Nacional en el Decreto 0062 de 2025 y el artículo 2º del Decreto 108 de 2025, que modificó de manera transitoria el artículo 19 de la Ley 387 de 1997. Así mismo, la precitada Resolución 283 de 2025, estableció que dicha delegación tendrá la misma vigencia del estado de conmoción interior y las prórrogas que determine el Gobierno Nacional y se circunscribirá a los municipios establecidos en el Decreto 0108 del 29 de enero de 2025.

Que mediante el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se adicionó el artículo 33 A de la Ley 387 de 1997 estableciendo el procedimiento administrativo especial para la inscripción y cancelación de medidas de protección en el Rupta, indicando que el Gobierno Nacional reglamentaría este asunto en armonía con la Ley 1448 de 2011, como en efecto se realizó por medio del Decreto 640 del 11 de mayo de 2020, *"Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 15 del Decreto 1071 de 2015, en lo relacionado con el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –Rupta."*

Que en el artículo 2.15.6.1.1 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, se definió el Rupta como un instrumento a través del cual las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia podrán obtener a través de una medida administrativa la protección de las relaciones de propiedad, posesión y ocupación de los inmuebles que hayan sido abandonados, debiéndose inscribir en el indicado registro al solicitante y su relación jurídica con el predio objeto de la medida.

Que conforme al artículo 2.15.6.1.2 ibídem las medidas de protección en el Rupta podrán recaer sobre predios ubicados dentro y fuera de las zonas microfocalizadas con fines de restitución. De tal forma que cuando se decida sobre la protección en el Rupta, siempre que se identifique que el solicitante satisface los requisitos de la Ley 1448 de 2011, en virtud de lo señalado en el artículo 76 de la mencionada norma, deberá iniciarse de oficio el procedimiento administrativo de restitución.

Que la región del Catatumbo y los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, se encuentran en una grave perturbación de orden público, caracterizada principalmente por el aumento de la violencia y las amenazas a la infraestructura crítica, que han derivado en la vulneración de los derechos humanos, los derechos fundamentales y el desplazamiento masivo de la población civil, las cuales, no pueden ser conjuradas

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

mediante el uso de las competencias, las funciones y/o herramientas ordinarias de las autoridades del Estado.

Que el artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, le confiere al Presidente de la República, la facultad para decretar el Estado de Conmoción Interior en todo o en parte del territorio nacional, en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, por lo que se podrán adoptar las medidas necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Que como consecuencia de los fuertes enfrentamientos entre grupos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad, daños a bienes protegidos y al medio ambiente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 062 del 24 de enero de 2025, con el cual, se declaró el Estado de Conmoción Interior, por el término de 90 días, *"en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar"*, con el fin de conjurar la grave perturbación del orden público que de manera excepcional y extraordinaria se está viviendo en la región Catatumbo.

Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0108 del 29 de enero de 2025, *"Por el cual se adoptan medidas de protección de tierras, territorios y activos, y prevención de la acumulación y acaparamiento en el sector agropecuario para atenuar los efectos derivados de la situación de orden público en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios del Río de Oro y González del departamento del Cesar, para las y los campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios, y sus formas organizativas en el marco del Estado de Conmoción Interior"*, con el fin de robustecer los instrumentos que permiten atender la grave situación de afectación a los derechos humanos de la población civil y la prevención de las situaciones de despojo o pérdida de derechos sobre la tenencia y propiedad de la tierra, que tiende a agudizarse en situaciones de conflicto.

Que el artículo 2 del referido Decreto 0108 del 29 de enero de 2025, modificó de manera transitoria el numeral 1º del artículo 19 de la ya citada Ley 387 de 1997, con la finalidad de poder gestionar las medidas de protección de las relaciones jurídicas de propiedad, posesión y ocupación de las víctimas de desplazamiento forzado, individual o masivo, a través de la inscripción en el Registro Único de Predios y

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

Territorios Abandonados – Rupta, debido a que la grave afectación de orden público presente en la región del Catatumbo, y sobre los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, tiene el potencial de alterar y/o debilitar los derechos de tenencia y propiedad de las tierras rurales de las población civil, cuya aplicación se realizará de la siguiente manera:

"(...) Artículo 2. Modificar. Modifíquese transitoriamente el numeral 1 del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, el cual quedará así:

"Artículo 19. De las Instituciones. Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

1. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado y las personas que se reincorporen a la vida civil, así como líneas especiales de crédito, dando prelación a la población desplazada.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas llevará un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia individual o masivamente, o que se encuentren en confinamiento, o en favor de aquella población en riesgo inminente de desplazamiento forzado. La Unidad registrará, individual o colectivamente, a los propietarios, poseedores y ocupantes y la relación jurídica con el predio e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, así como la inscripción de la medida preventiva y publicitaria frente a los poseedores y ocupantes.

Las medidas de protección del Rupta adoptadas no suspenderán los procesos de formalización predial, asignación o reconocimiento de derechos, o acceso a tierras en los casos en los cuales el interesado sea el mismo beneficiario de la medida de protección, su compañero/a permanente, cónyuge o alguno de sus legitimados, en los términos del artículo 81 de la Ley 1448 de 2011. (...)"

Que el artículo 2º del Decreto No. 0467 del 23 de abril de 2025, expedido por el Gobierno Nacional "Por medio del cual se levanta el Estado de Conmoción Interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar y se prorroga la vigencia de unas disposiciones", prorrogó por noventa (90) días calendario a partir del 24 de abril de 2025, la vigencia del Decreto 108 de 2025, entre otros, por considerar que las medidas extraordinarias decretadas a través del

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución **RDGN 00037** del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

Decreto 062 de 2025, han contribuido a conjurar las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, lo cual, no implica el retorno inmediato de los pobladores víctimas del conflicto armado a sus lugares de origen ni elimina el riesgo de que se efectúen acciones tendientes a desconocer o afectar la titularidad, tenencia y ocupación de predios de las comunidades campesinas y/o étnicas, por tal razón, se requiere la continuidad de las medidas establecidas en el referenciado Decreto 108 de 2025, con el fin de garantizar la atención del impacto sobre la población afectada por la grave perturbación de orden público.

Que según lo preceptuado por el artículo 2.15.6.1.4 del precitado Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 2020, son titulares para solicitar la inscripción en el Rupta las personas que acrediten ser propietarios o poseedores de predios rurales y urbanos u ocupantes de bienes baldíos.

Que conforme al artículo 2.15.6.2.1 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 2020, las solicitudes de inscripción en el Rupta deberán reunir los siguientes requisitos:

- "1. Ser presentadas dentro de los dos (2) años siguientes al hecho victimizante, salvo fuerza mayor o caso fortuito, conforme a lo descrito en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019.*
- 2. Identificación de la persona que solicita la inscripción en el Rupta.*
- 3. La acreditación sumaria de la relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación del predio sobre el cual se solicita la inscripción.*
- 4. Narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho victimizante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 y el artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.*
- 5. Acompañarse de prueba sumaria que acredite la identificación registral o catastral del inmueble, en los eventos en que el solicitante tenga acceso a esa información, y en todos los casos, informar la localización del predio, con indicación de departamento, municipio, corregimiento, vereda y dirección o nombre del predio."*

Que el artículo 2.15.6.2.4 *ibídem* estableció con base en lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019, que la entidad administradora del Rupta tendrá un término de sesenta (60) días, para decidir sobre la inscripción o cancelación en este registro, el cual podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen.

Que el artículo 2.15.6.2.5 del referido Decreto, establece que cuando se advierta que existen terceros que puedan resultar afectados directamente por la decisión, la Unidad de Restitución de Tierras deberá comunicarles la existencia del trámite a través del medio más eficaz, asegurándose en todo caso de realizar una publicación en la página web de la entidad dando cuenta de la actuación administrativa que se adelanta y la oportunidad que tienen los interesados para aportar pruebas, en cualquier momento de la actuación administrativa y hasta antes de que profiera decisión de fondo.

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

Que el artículo 2.15.6.2.6 establece que *"la entidad administradora del Rupta, de oficio o a petición de parte, decretará y practicará en el procedimiento administrativo de inscripción o de cancelación de medidas de protección, todas las pruebas que considere necesarias, pertinentes y conducentes, sin requisitos especiales, en cualquier momento de la actuación administrativa y hasta antes de que profiera decisión de fondo"*.

Que el precitado artículo indica en su inciso segundo que el material probatorio que se requiera se deberá decretar por medio de la resolución de inicio de estudio formal y en caso de requerir elementos adicionales, podrá realizar su decreto mediante un acto de pruebas debidamente motivado. Estos actos administrativos deben ser comunicados al solicitante a la dirección o correo electrónicos registrados en la solicitud, o a través del medio más eficaz, de modo que se puedan controvertir las pruebas por escrito hasta antes de que se profiera la decisión.

Que esta Dirección Jurídica de Restitución, encontró que se acreditaron los requisitos para la presentación de la solicitud de inscripción referidos previamente (artículo 2.15.6.2.1). En ese sentido, con el objetivo de validar el cumplimiento de los requisitos de procedencia para la inscripción en el Rupta establecidos en el artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, se deberá iniciar formalmente el estudio de la solicitud y el decreto de pruebas en términos de necesidad, conducencia y pertinencia.

ANTECEDENTES:

a. HECHOS:

1. La señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, presentó solicitud de inscripción en el Rupta el **3 de marzo del 2025**, respecto del predio denominado **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, identificado de Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **260 - 37330** y sin Número Predial, en su calidad de **propietaria según lo informado por la solicitante**.
2. La solicitante manifestó que fue víctima de desplazamiento forzado por causa de la grave perturbación del orden público que de manera excepcional y extraordinaria se presenta en la Región del Catatumbo, teniendo que abandonar el referido inmueble de conformidad con la narración realizada en la recepción de la solicitud, como se transcribe a continuación:

"Mi esposo fue el que compró el predio, él le compró a la señora Luisa Amelia Martínez Hernández en el año 1997, por un valor de \$4.500.000, el predio tiene un área de 30 hectáreas, pues hasta el momento no se ha hecho el trámite de la sucesión.

Lo que sucede es que donde esta ubicada la finca esta cerca a allegados o personas cercanas a las FARC, en esa finca se la pasaban los grades mandos en las reuniones y la finca pues es llegadero por el río entonces en si pues la finca es como el puerto, por

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

lo cual cuando ellos aparecían pues la finca siempre tenía presencia de las FARC. En estos momentos cuando inicia el conflicto, no es un secreto que todos los predios le pertenecían a familiares, cercanos, o simpatizantes de las FARC, han sido tomados por el ELN y este predio pues es un de esos, donde se llevaron varias cosas de la finca y en este momento tengo conocimiento que hay personas del ELN habitando mi finca, teniendo en cuenta que mi compañero es líder social desde el 2008 en la comunidad de Puerto Las Palmas y desde 2016 ha habido problemas en los procesos de paz, en ese momento era el presidente de la junta y promovió la sustitución voluntaria donde 41 familias firmaron el acuerdo voluntario y eso causo molestias para el ELN, ya que intentamos trabajar por el medio ambiente, estos quemaderos de crudo fueron intentados cerrarlos por el daño del medio ambiente y esto también le causo molestia a la organización del ELN y por el programa del pnis para el 2018 llegó un joven como de 15 o 16 años en horas de la mañana con dos señores mas armados tratando de sacar a mi compañero Alexander Molina, ellos se identificaron como del ELN donde mi compañero no quiso salir y pues lo citaron en un parte montañosa donde a él lo acusaban que por culpa de él era que habían arrancado la mata, que él era un sapo del gobierno, entonces por mi compañero fue que siempre hemos tenido este problema con el ELN y EPL.

Cuando empezó toda esta guerra el 16 de enero, pues mi compañero es declarado objetivo militar por parte del ELN, ya que lo señalan de hacer parte de las FARC, solo por hacer trabajo o liderazgo sociales, entonces por eso nos vemos afectados y no podemos volver al predio. Cabe aclarar que junto con mi hijo salimos el día 21 de enero, en camionetas de la ONU, mientras que mi compañero lo sacaron en un helicóptero.

(...)

Quiero agregar que he sido víctima de desplazamiento forzado por 3 ocasiones, en el año 2000, parecido a lo que esta sucediendo, mi esposo en ese tiempo volvió y lo asesinaron los paramilitares, entonces dejar constancia, y en el año 2018 el ELN y EPL y también en enero del presente año."

b. A su vez la solicitante aportó los siguientes documentos que respaldan su solicitud:

- Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**.
- Copia de la Escritura Pública No. 2935 del 31 de octubre de 1994, de la Notaria Cuarta del Círculo de Cúcuta, por medio de la cual, la señora **LUISA AMELIA MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ**, realizó la venta de un lote de terreno denominado **LAS PALMAS** de 30 Ha., identificado con el FMI 260-37330, al señor **EDMIGIDIO GUALDRON ORJUELA**.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS:

Con el fin de acreditar los requisitos del artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015 adicionado por el Decreto 640 de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras adelantó las actuaciones que se describen a continuación y recaudó la siguiente información:

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

- Se tomó la solicitud de Inscripción de Medida de Protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA.
- Se creó en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados - Rupta- el ID **1127676** relacionado con el predio denominado **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, identificado de Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **260 - 37330**.
- Constancia de Requerimiento de Inscripción de Medida de Protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA.

ANÁLISIS DE LA UNIDAD

El artículo 2.15.6.2.7 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020 estableció los requisitos de procedencia de un trámite de inscripción en el Rupta, los cuales se detallan a continuación:

1. Que se acredite la relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación, según corresponda, con el predio objeto de la medida.
2. Que se reúna las condiciones de víctima de desplazamiento forzado, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
3. Que la solicitud de inscripción en el Rupta o el inicio de oficio por parte de la entidad administradora del Rupta se haya realizado dentro del lapso de los dos (2) años establecidos en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
4. Que se identifique el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual se dispondrá inscribir la medida de protección, si a ello hay lugar.

Así mismo, al analizar las actuaciones descritas en los acápites anteriores, en contraste con el material probatorio recaudado hasta este momento, no se advierte la configuración de alguna de las causales de improcedencia de la solicitud establecidas en el artículo 2.15.6.2.3 del Decreto 1071 de 2015, sin embargo, se considera que para acreditar el cumplimiento de los requisitos previamente expuestos se requieren mayores elementos de prueba para adoptar una decisión de fondo, por lo que es necesario decretar el inicio de estudio formal del caso.

En consecuencia, la Dirección Jurídica de Restitución procederá a verificar los hechos, las afirmaciones y demás elementos dentro del trámite desarrollado en el presente acto administrativo y ordenará recabar o practicar, con destino al expediente, todas las pruebas y diligencias necesarias para la adopción de la decisión de fondo, dentro del término establecido en el artículo 84 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.15.6.2.4 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020, el cual comenzó a correr a partir de la recepción de la solicitud, así como lo establecido por el Gobierno Nacional mediante los Decretos No. 062 del 24 enero de 2025 y No. 0108 del 29 de enero de 2025.

Con base en lo anterior, se emitirán las órdenes relativas a:

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

- Establecer la relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación, de la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, con el predio objeto de la medida.
- Establecer y acreditar las condiciones de víctima de desplazamiento forzado, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 y el artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.
- Surtir la identificación registral o catastral del predio y la determinación de la naturaleza jurídica del mismo.
- Determinar la localización del predio, en relación con la identificación del departamento, municipio, corregimiento, vereda y dirección donde se encuentra ubicado.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.15.6.2.5 del Decreto 1071, se ordenará la realización de una publicación en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras, en la que se dará cuenta del trámite administrativo que se adelanta y la oportunidad que tienen los interesados para aportar pruebas en cualquier momento de la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera decisión de fondo.

Pese a lo anterior, se resalta que del estudio realizado hasta al momento, no se identificaron terceros que puedan resultar directamente afectados por la decisión que se adopte en el curso del presente trámite administrativo, por lo que no se impartirán órdenes de comunicación diferentes a las indicadas *supra*.

En atención a lo expuesto, la Directora Jurídica de Restitución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

RESUELVE:

PRIMERO: INICIAR el estudio formal de la solicitud de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – Rupta, presentada por la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, respecto del predio denominado **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, identificado de Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **260 - 37330** y sin Número Predial; de acuerdo con lo descrito en la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: DECRETAR la incorporación a la presente actuación administrativa de las siguientes pruebas acopiadas en desarrollo del presente trámite de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – Rupta, de conformidad con lo indicado en la parte motiva:

- Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**.

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

- Copia de la Escritura Pública No. 2935 del 31 de octubre de 1994, de la Notaria Cuarta del Círculo de Cúcuta, por medio de la cual, la señora **LUISA AMELIA MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ**, realizó la venta de un lote de terreno denominado **LAS PALMAS** de 30 Ha., identificado con el FMI 260-37330, al señor **EDMIGIDIO GUALDRON ORJUELA**.
- Solicitud de Inscripción de Medida de Protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA, con el ID **1127676** relacionado con el predio denominado **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, identificado de Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **260 - 37330**.
- Constancia de Requerimiento de Inscripción de Medida de Protección en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA.

TERCERO: DECRETAR la recolección y práctica de las siguientes pruebas:

- a) Ordenar al Área Social de la **UAEGRTD** que adelante las gestiones para contactar por el medio más expedito o citación a los puntos de atención al ciudadano dispuestos por parte de la **UAEGRTD** a la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de este acto de inicio, para que la solicitante se sirva allegar prueba sumaria que acredite o a esclarecer su relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación, con el predio objeto de la medida.
- b) Ordenar al Área Catastral de la Unidad el cargue en el módulo Vida Catastral, en formato **SHAPE** del polígono del predio **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**, identificado de Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **260 - 37330**.
- c) Ordenar al Área Catastral de la **UAEGRTD** realizar el acta de localización predial y realizar las consultas tendientes a la identificación registral y catastral del predio, a fin de establecer, la localización exacta y la determinación de la naturaleza jurídica respecto del inmueble objeto de la presente solicitud.
- d) Consultar en bases de datos de la Policía Nacional dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de este acto de inicio de estudio formal, si la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, tiene antecedentes penales.
- e) Consultar la plataforma **VIVANTO** de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a la Víctimas – UARIV-, a fin de establecer si la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas – RUV.

RU-MO-03
V4

Continuación de la Resolución RDGN 00037 del 28 de abril de 2025: "Por la cual se inicia el estudio formal en un procedimiento de inscripción en el Rupta por solicitud de parte"

- f) Consultar la Ventanilla Única de Registro – VUR a fin de identificar el **Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 260 – 37330** a fin de establecer la situación y naturaleza jurídica del predio denominado **LAS PALMAS**, ubicado en la vereda **PUERTO LAS PALMAS**, corregimiento **LA GABARRA** del municipio de **TIBÚ**, en el departamento de **NORTE DE SANTANDER**.
- g) Consultar en el Nodo de Tierras de la entidad, el Sistema de Información Interinstitucional para Justicia y Paz (SIJYP) y el Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición de este acto, a fin de establecer si la señora **MARÍA LUCRECIA CABALLERO MARTÍNEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **60.360.951** de **CÚCUTA**, se encuentra vinculada a una investigación o a un proceso penal en calidad de víctima, denunciante o indiciada, y el delito correspondiente, de ser el caso.
- h) Oficiar a la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional y a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, para que en el término de 10 días, aporte la localización político-administrativa aproximada (departamento, municipio, corregimiento, vereda, etc.) de los grupos al margen de la ley que operaron en el municipio de **TIBÚ**, departamento de **NORTE DE SANTANDER**, en los últimos dos años, así como, toda la información que se considere pertinente allegar frente al asunto.

CUARTO: COMUNICAR a través de la página web de la Unidad de Restitución de Tierras, el inicio de estudio formal del presente trámite, informando la oportunidad que tienen los interesados para aportar pruebas en cualquier momento de la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera decisión de fondo; de conformidad con lo ordenado por el artículo 2.15.6.2.5 del Decreto 1071 de 2015, adicionado por el Decreto 640 de 2020.

QUINTO: Contra el presente acto administrativo no proceden recursos, por ser su naturaleza de trámite.

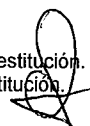
Comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días, del mes de abril de 2025



PAULA ANDREA VILLA VÉLEZ
DIRECTORA JURÍDICA DE RESTITUCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DESPOJADAS

Proyectó: Camilo Andrés Puerto Lozano – Contratista– Dirección Jurídica de Restitución.
Revisó: Ángela María Suárez Lozano – Contratista – Dirección Jurídica de Restitución.



RU-MO-03
V4

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 1/09/2020

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Jurídica de Restitución,

Carrera 13 A No. 29-24 piso 10. (+601) 377 03 00 Bogotá - Colombia

www.restituciondetierras.gov.co Síguenos en: @URestitucion